



## **Consulta Pública Carta Derechos Digitales**

Diciembre 2020



*Salvo que se indique lo contrario, se autoriza la reutilización de este documento bajo una licencia [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Se permite la reutilización siempre que se indique la autoría, se dé el crédito apropiado y se indique cualquier cambio realizado respecto al documento original.*

## **Introducción**

A lo largo de los últimos años, los avances en materia de digitalización han ido transformando poco a poco la sociedad y la economía de nuestro país y los de alrededor. Las invenciones y las tecnologías digitales o basadas en lo digital plantean la necesidad de asegurar la protección de los derechos digitales y colectivos de las personas.

ASEDIE<sup>1</sup> aglutina a empresas del Sector Infomediario, que tienen por objeto el uso, reutilización y distribución de la información, creando productos de valor añadido que contribuyen a dar una mayor seguridad al tráfico mercantil global, luchando entre otros, contra el fraude y el blanqueo de capitales. Conocer los avances en materia de apertura de datos, reutilización, transparencia, Inteligencia artificial etc., es de gran importancia para el Sector, ya que afectaran al desarrollo de sus productos.

Dada la naturaleza de la actividad desarrollada por nuestra Asociación y por los asociados que la integran, creemos de interés hacer llegar el presente documento con las aportaciones a la Carta de Derechos Digitales, ya que el entorno digital es el entorno natural de funcionamiento de nuestros asociados.

## **Aportaciones al Artículo XVI, sobre Derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones públicas.**

El artículo 16.3 de la Carta de Derechos Digitales establece que *“el principio de transparencia y de reutilización de datos de las Administraciones públicas guiará la actuación de la Administración digital, de conformidad con la normativa sectorial. En particular, se garantizará el derecho de acceso a la información pública, se promoverá la publicidad activa y la rendición de cuentas y se velará por la portabilidad de los datos y la interoperabilidad de los formatos, sistemas y aplicaciones”*.

Entre los objetivos de Asedie se encuentra buscar medidas que impulsen la transparencia, el acceso y la apertura de datos. Por eso, desde Asedie trabajamos en impulsar la apertura de bases de datos del Sector Público.

---

<sup>1</sup> ASEDIE, Asociación Multisectorial de la Información, es una Asociación de carácter profesional, multisectorial, voluntaria, sin ánimo de lucro, constituida por tiempo indefinido y que se rige con criterios democráticos y por representantes libremente escogidos. De conformidad con sus Estatutos Sociales, inscritos en el Registro de Asociaciones Empresariales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social bajo el número 99004660, sus asociados pueden ser las empresas, organismos públicos y privados que desde distintos sectores tengan por objeto el uso, reutilización y distribución de la información, contribuyendo a dar una mayor seguridad al tráfico mercantil global e impulsando la economía mediante la aplicación de técnicas que favorezcan la fiabilidad y transparencia de las transacciones comerciales en el ámbito empresarial. ASEDIE defiende los intereses de las empresas “infomediarias”, es decir aquellas que recopilan, analizan y tratan información del Sector Público y/o privado para crear productos de valor añadido destinados a terceras empresas o a la ciudadanía en general, sirviendo, entre otras funciones, para la toma eficaz de decisiones. Su carácter multisectorial se trasluce en que los Asociados se agrupan en varios “sectores”: Información comercial y mercantil, Información electrónica, Gestión de cobros, Bureaus de crédito y Tecnologías de información. Con independencia del sector de actividad en el que actúen producen un beneficio social general, en la medida que incrementan la transparencia y generan nuevos conjuntos de información susceptibles de ser aprovechados por todos los participantes de la sociedad de la información.

Es una opinión compartida tanto por el Sector Público como por el Privado que la apertura de los datos del Sector Público y su reutilización conlleva numerosos beneficios económicos y sociales. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar la gran barrera que suponen las distintas normativas existentes, a la hora de acceder a la información, que en ocasiones implican restricciones al acceso y barreras a su reutilización.

Desde Asedie hemos identificado aquellos aspectos de la actual Ley 18/2015 sobre Reutilización de la Información del Sector Públicos que suponen una barrera a la reutilización, con el objeto de que, en la necesaria nueva transposición en España de la Directiva RISP queden modificados de tal forma que cumplan con el espíritu de la Directiva y de la Carta de Derechos Digitales de garantizar el derecho de acceso a la información pública y su reutilización.

### **Primera Barrera: Exclusiones de Información de las Administraciones Públicas:**

El Parlamento y el Consejo Europeo consideraron que la Directiva 2013/37 debía derogar la anterior Directiva del año 2003 por quedar desfasada a consecuencia de la aparición del *bigdata*, y de la gran evolución de la tecnología. La Directiva 2013/37 nació, por tanto, con un claro espíritu de agilizar y dinamizar la puesta a disposición de la información del Sector Público a los agentes reutilizadores.

En España, la transposición se hizo a través de la Ley 18/2015 sobre reutilización de la información del Sector Público. Con esta transposición se debía imponer nuevas obligaciones a la Administración Pública encaminadas a facilitar la reutilización por defecto y eliminar todas las barreras y restricciones en el acceso a la información del Sector Público, teniendo como únicas limitaciones, los derechos que, en materia de propiedad intelectual, confidencialidad comercial y protección de datos, pudieran existir. Muchos de estos objetivos se consiguieron, pero también se incluyeron preceptos que no solo no facilitan la reutilización, sino que en la práctica potencian la exclusión.

Así se observa especialmente en la modificación que sufrió el artículo 3.3 apartado b) que establece que la ley no será aplicable a la información que los organismos de la Administración Tributaria y de la Administración de la Seguridad Social recaben de los sujetos obligados, independientemente del tipo de información y de la existencia o no sobre ella de limitaciones por derechos de propiedad intelectual, confidencialidad comercial, protección de datos personales o de cualquier otra norma específica. **Esta amplia limitación, en la práctica supone la imposibilidad para los agentes reutilizadores de acceder a información** que no es confidencialidad, ni está sujeta a secreto o deber de reserva por carecer desde su origen de estas características. En concreto **se hace imposible poder acceder** para su reutilización a datos básicos de identificación, localización, datos de contacto, descripción de actividad y confirmación de estar operando o haber cesado la actividad, de entidades jurídicas (no personas físicas) que operen en territorio español.

Ambas Administraciones, tanto la Agencia Estatal de la Administración tributaria (AEAT) como la Seguridad Social españolas poseen las bases de datos más completas, exactas, fiables y con mayor y mejor actualización en tiempo de estos datos, que son esenciales para los múltiples reutilizadores de la información existentes en el mercado y a las que no se puede acceder con esta limitación, aunque no haya ninguna otra regulación que interfiera.

Se espera que, con la transposición de la Directiva (UE) 2019/1024, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del Sector Público se vean reflejados estos preceptos en la futura nueva ley española de Reutilización de la Información del Sector Público, permitiendo la apertura a aquellos datos de AEAT y Seguridad Social que, por su naturaleza, no sean de carácter personal o sujetos a confidencialidad o a cualquier otra normativa.

### **Segunda Barrera: La desestimación de solicitudes de acceso a la reutilización de la información del sector público por silencio administrativo.**

Desde el Sector Privado (concretamente el Sector de infomediarios y reutilizadores de información del Sector Público) se ha observado que, ante las solicitudes de reutilización de los documentos de las distintas Administraciones, un elevado número de ocasiones, el organismo de la Administración, amparado en la propia normativa, **opta por no dar respuesta**, lo que implica la denegación de la solicitud por aplicación del artículo 10.8 de la Ley 18/2015.

Esta opción a discreción de la Administración, de la denegación de las solicitudes por silencio administrativo, es otro de los impedimentos graves al que se está enfrentando en la actualidad los agentes reutilizadores para lograr acceder a la información del Sector Público.

La Directiva de 2013 indicó que los organismos del Sector Público deben al menos, **comunicar al solicitante los motivos de la denegación** sobre la base de las disposiciones aplicables del régimen de acceso del Estado miembro correspondiente o de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la Directiva. Esta condición de comunicar la decisión negativa junto con los motivos debiera, haberse contemplado en la Ley 18/2015. Sin embargo, no se hizo así, siendo por tanto la regla elegida por el legislador español mantener el carácter desestimatorio o negativo, al silencio administrativo.

Desde el punto de vista de los agentes infomediarios, una interpretación del silencio Administrativo como desestimatorio en el ámbito de la reutilización de la información del Sector Público, contradice el espíritu y los objetivos de todas las Directivas europeas en la materia dictadas hasta el momento. **Cualquier solicitud de reutilización debiera tener respuesta en un sentido o en otro**, el que no haya respuesta es quizá el mejor ejemplo de opacidad de la Administración sobre los principios de la reutilización de la información del Sector Público y transparencia.

Así parece entenderlo también la nueva Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la Reutilización de la Información del Sector Público, mantiene en su artículo 4.3 la **necesidad de comunicar las decisiones negativas, sin que las mismas tengan porqué dejarse en silencio.**

**Tercera Barrera: Problemática surgida por la aplicación de la disposición adicional de la Ley 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales.**

La Ley 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (LPDPGDD), vino a establecer en su Disposición adicional séptima, una serie de indicaciones a los organismos de la Administración Pública que deban publicar actos administrativos en los Tablones edítales, Boletines y Diarios Oficiales y cualquier otro medio de publicidad.

Estas indicaciones, van encaminadas a evitar que terceros puedan identificar de forma directa a los sujetos, personas físicas, sobre los que refiere la publicación, eliminando de la publicación ciertos datos.

El problema que se ha encontrado en la práctica radica en que algunas de las Administraciones encargadas de realizar este tratamiento de la información **han excedido la eliminación** de los datos con lo que:

- 1º. Se están aplicando estas limitaciones sobre la información, no solo a los únicos sujetos sobre los que hay obligación, es decir las personas físicas, sino también a edictos dirigidos a personas jurídicas.
- 2º. Impide a los Reutilizadores de esta información poder asociarla en sus bases de datos y ficheros de solvencia, legitimados por la propia habilitación que para ello queda establecida en la normativa sobre protección de datos personales.

Los compromisos y propósitos que desde las Administraciones Públicas se hagan relativos al impulso a la apertura de datos y a la reutilización deben tener en cuenta estas problemáticas planteadas, así como velar por que la transposición a la normativa nacional de la Directiva 2019/1024 ofrezca soluciones que permitan una verdadera reutilización de la información.

El acceso a las bases de datos y la información del Sector Público, así como su posterior reutilización y el desarrollo de servicios y productos de valor añadido para la sociedad se llevan a cabo digitalmente, por lo que desde Asedie consideramos que las barreras al acceso y reutilización a las que hemos hecho mención deben ser tenidas en cuenta por la administración pública en la elaboración de la Carta de Derechos Digitales, para que se garantice realmente el derecho de acceso a la información del Sector Público de la ciudadanía.

**El impulso a la apertura de datos y a la reutilización** de la información va acompañado del **impulso a la transparencia**, como se pone de manifiesto en la redacción del artículo 16.3 de la Carta de Derechos Digitales. A medida que la transparencia y la accesibilidad sea mayor y menos costosa, se incrementarán los productos de valor añadido con el impacto socioeconómica que representa aportando a la sociedad:

1. Mayor inteligencia a la información existente: los nuevos productos y la mejora de los existentes, supone beneficios evidentes para la Sociedad.
2. Incremento de la Seguridad Jurídica y Comercial al añadir más transparencia a la información disponible proveniente del Sector Público.
3. Desarrollo de la economía e impulso del mercado laboral: Previsiones de empleo y crecimiento económico que se hacen realidad.
4. Interés medio ambiental y de investigación, a nivel empresarial y del ciudadano.

La transparencia tiene un efecto transversal, al igual que el Sector Infomediario ya que ambos ayudan a incrementar el desarrollo de prácticamente la totalidad de los sectores. El valor añadido que ofrecen las empresas infomediarias en la toma de decisiones, es necesario para el fortalecimiento del entramado empresarial y para poder competir a nivel internacional creando seguridad en el ciudadano y por tanto en la Sociedad en general.

Para impulsar la transparencia es necesario cumplir con lo establecido en materia de **publicidad activa**, la obligación de las administraciones (y otros sujetos obligados) de publicar de manera periódica, actualizada, veraz, comprensible y gratuita la información establecida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (como ley básica) y en el resto de la normativa autonómica que le sea aplicable. El mantenimiento, coordinación y actualización periódica de los distintos Portales de Transparencia es clave para cumplir con las obligaciones de publicidad activa.